**PROYECTO DE LEY No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE 2023**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO TERRITORIAL DE MANO DE OBRA LOCAL Y EMPRENDEDORES, COMO MEDIDA PARA EL IMPULSO AL EMPLEO LOCAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

**“EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

 **DECRETA”**

**Artículo 1°. Objeto.** La presente Ley tiene por objeto crear en los departamentos, distritos y municipios un sistema de registro territorial de mano de obra local y de emprendedores para facilitar la implementación de lo dispuesto en el artículo 80 y 88 de la Ley 2294 de 2023, y desarrollar una estrategia de mejoramiento de los índices de empleabilidad en las regiones.

**Artículo 2°. Definiciones.**

**Mano de Obra Local.**  Para todos los casos se considerará mano de obra local a aquellas personas o agrupación de trabajadores que acrediten su residencia con el certificado expedido por la alcaldía municipal, de conformidad con lo previsto en el numeral 6° del literal f) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012.

**Emprendedor.** Para efectos de la presente Ley entiéndase por emprendedor a toda persona con capacidad de innovar, de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva.

**Artículo 3°.** Las gobernaciones, alcaldías distritales y municipales deberán, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, poner a disposición de los ciudadanos, emprendedores y agrupación de trabajadores un sistema de registro territorial a la que podrá acceder cualquier interesado en hacer parte del registro de mano de obra local y emprendedores.

Para dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 80 y 88 de la Ley 2294 de 2023, las entidades territoriales y los contratistas deberán acudir al sistema de registro de que trata el inciso anterior para consultar la mano de obra local y los emprendedores disponibles para las inversiones y programas que se ejecuten en sus territorios.

En ningún caso se podrá negar la inscripción a los ciudadano o agrupaciones de trabajadores que habiten en la circunscripción territorial.

**Parágrafo Primero.** Cuando se trate de agrupación de trabajadores y organizaciones similares, se deberá exigir el registro de existencia y representación legal de la misma.

**Parágrafo Segundo.** El registro territorial de mano de obra local y de emprendedores contendrá la mano de obra local calificada y no calificada existente en el territorio.

**Parágrafo tercero.** El sistema de registro territorial de mano de obra local y de emprendedores de que trata la presente Ley deberá contener al menos los datos de los trabajadores u organizaciones, actividad a la que se dedican, experiencia y soportes de los mismos.

**Artículo 4°. Administración del Sistema de Registro Territorial de Mano de Obra Local y de Emprendedores.** El sistema de registro territorial de mano de obra local y de emprendedores será alimentado por la misma ciudadanía a través de medios físicos o tecnológicos que disponga la entidad territorial, quien será la encargada de su administración. La implementación del sistema no implica erogaciones o la creación de una nueva dependencia especializada.

**Artículo 5°. Vigencia y Derogatorias.** La presente ley deroga las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su promulgación.

|  |  |
| --- | --- |
| **KARYME COTES MARTÍNEZ**Representante a la Cámara |  |
|   |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PROYECTO DE LEY**

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA EDAD DEL CONSENTIMIENTO SEXUAL PARA MENORES DE EDAD, SE PROTEGE LA LIBERTAD SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”**

1. **INICIATIVAS LEGISLATIVAS.**

El artículo 150° de la Constitución Política establece:

*“Corresponde al Congreso hacer las leyes (…)”.*

Así mismo, el mismo texto constitucional consagra en su artículo 154° lo que sigue:

*“Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo*[*156*](http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr005.html#156)*, o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución (…).”* (Subrayado fuera de texto).

En el desarrollo legal, la Ley 5ta de 1992 estableció en su artículo 140º, modificado por el artículo 13 de la Ley 974 de 2005, lo que a continuación se indica:

*Pueden presentar proyectos de ley:*

*1. Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través de las bancadas.*

*2. El Gobierno Nacional, a través de los Ministros del Despacho.*

*3. La Corte Constitucional.*

*4. El Consejo Superior de la Judicatura.*

*5. La Corte Suprema de Justicia.*

*6. El Consejo de Estado.*

*7. El Consejo Nacional Electoral.*

*8. El Procurador General de la Nación.*

*9. El Contralor General de la República.*

*10. El Fiscal General de la Nación.*

*11. El Defensor del Pueblo.*

 *(Subrayado fuera de texto).*

1. **ANTECEDENTES**

El pasado 19 de mayo del año 2023 se expidió la Ley 2294 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. El artículo 80 de la mencionada Ley establece lo que sigue:

***“CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL.****Todas las inversiones y programas proyectados a ejecutarse en las regiones deberán contratar como mínimo el 50% de mano de obra local, siempre y cuando exista la mano de obra con las capacidades que requiere la ejecución de las inversiones y programas”.*

Asimismo, en el artículo 88 de la misma normatividad se estipuló lo siguiente:

***“INSTRUMENTOS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA Y CREDITICIA DE LA ECONOMÍA POPULAR, LA PROMOCIÓN DE LAS FINANZAS VERDES, LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO.****El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en articulación con otras entidades del Estado, impulsará el desarrollo de instrumentos y programas para promover la inclusión financiera y crediticia de la Economía Popular, especialmente pequeños productores del sector agropecuario y los micronegocios, la promoción de las finanzas verdes, la innovación y el emprendimiento.*

*(…)”.*

Lo anterior muestra la clara intención del gobierno de turno de dinamizar la economía de las regiones, disminuir las cifras de desempleo y obligar a que los contratistas y las administraciones locales y departamentales prioricen el talento de los ciudadanos de los territorios en los que se ejecutan las obras y programas.

No obstante, para una correcta implementación de la medida creada en el artículo citado, es necesario que tanto las entidades territoriales como los contratistas tengan una manera segura y confiable para constatar la presencia en el lugar de la mano de obra calificada y no calificada que pudieren necesitar en la ejecución del programa o contrato.

En doble vía, la medida también aseguraría la participación de las comunidades, creando empleos y combatiendo los índices de desocupación e informalidad que abundan en las regiones más apartadas del país.

1. **FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES**

La Constitución Política Colombiana, al establecer los fines esenciales del Estado, indica en su artículo 2° como uno de ellos “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (…)”.

Asimismo, el artículo 25 superior indica que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado.

El artículo 26 del mismo texto constitucional consagra lo que sigue:

“(…) toda persona es libre de escoger profesión u oficio. (…) Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social (…)”.

Por otro lado, el Convenio de la OIT No. 169 acogido por el Estado colombiano a través de la Ley 21 de 1991 (razón por la que hace parte del bloque de constitucionalidad) trae en su artículo 20 una obligación para los Estados la cual consiste en la adopción de medidas afirmativas para evitar cualquier tipo de discriminación en materia laboral, especialmente en lo relativo al acceso al empleo, incluyendo empleos de mano de obra calificada.

El artículo 315 constitucional establece como una de las obligaciones de los Alcaldes cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, así como asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.

Precisamente con base en el anterior artículo se expidió la Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, consagrando en el numeral 6° del literal f) la competencia para los administradores de las autoridades locales la de expedir certificación para acreditar residencia.

Adicionalmente, hay que indicar lo que trae consigo el artículo 4° de la Ley Estatutaria 163 de 1994, la cual indica que para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral y que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad de juramento, residir en el respectivo municipio.

El artículo 78 del Código Civil señala que el lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad.

El mismo Código Civil establece en su artículo 79 una presunción negativa del ánimo de permanencia, en el sentido que "no se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante".

Siguiendo con lo que nos muestra el Código Civil Colombiano, hay que traer a colación lo que indica el artículo 80 sobre la presunción positiva en el sentido que "al contrario, se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela y otro establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un empleo fijo de lo que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circunstancias análogas".

El SISBEN ha sido otra herramienta utilizada para el manejo y actualización de bases de datos en las entidades territoriales, tal como se consagra en la Ley 715 del año 2001.

Para dar mayor claridad en el tema de la residencia para el manejo de la mano de obra local relacionada con contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, el gobierno nacional ha expedido varios decretos que regulan con claridad la materia, pero para el caso que nos convoca en el presente proyecto no se tiene una herramienta como la que aquí se plantea para facilitar la consulta y acceso a la mano de obra calificada y no calificada en los territorios.

1. **DESEMPLEO E INFORMALIDAD EN COLOMBIA**

Las últimas cifras publicadas por el DANE nos muestran que, a junio del presente año, el desempleo del país se ubicó en el 9,3%, existiendo más de 2 millones de personas desocupadas, cifra que, si bien mejora en comparación con el mismo mes del año anterior, o con el 14,6 de enero del año 2022, aún continúa siendo bastante preocupada, más aún cuando la metodología que se utiliza incluye a personas que trabajan por lo menos una hora remunerada a la semana.

Existen cifras bastante desalentadoras en ciudades como Quibdó, capital del departamento de Chocó, en donde la cifra de desempleo rozó el 30%, al igual que Arauca.



En cuanto a la informalidad, las cifras mostradas por el DANE confirman que Colombia continúa siendo un país de rebuscadores, de personas que se levantan a trabajar en el conocido popularmente como “rebusque” o “el diario”, realidades que impiden el acceso a una estabilidad, a una pensión, y mucho menos a cesantías y beneficios afines.

El DANE afirma que la proporción de ocupados informales se ubica en un preocupante 55.8%, siendo Sincelejo con el 70% y Riohacha con el 63,9%, las ciudades con las cifras más altas de informalidad. Por su parte, la ciudad con menor porcentaje de informalidad es la capital Bogotá con el 32,9%.

Lo anterior no es una novedad. Las industrias, empresas y los factores de competitividad se acumulan en pocas regiones del país y escasean en la mayoría del territorio nacional. Así lo muestra un estudio publicado por el Consejo Privado de Competitividad[[1]](#footnote-1) en el que se puede observar que Bogotá y, en menor puntaje, Antioquia, son los territorios con mejor puntaje de competitividad. Contrario a ello, sin ser una sorpresa, territorios como Chocó, Vichada, La Guajira o Vaupés, ocupan los últimos lugares en dicha tabla.



1. **NECESIDAD DEL PROYECTO**

La presente iniciativa se muestra como una oportunidad, por un lado, para hacer efectivo lo que se consagra en el artículo 80 de la Ley 2294 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en la medida en que, la intención de darle importancia a la mano de obra local, necesita de una herramienta que permita identificar el potencial calificado y no calificado de la fuerza laboral presente en cada región para, de esta manera, asegurar la creación oportunidades laborales (respetando los porcentajes que allí se consagran) para la ciudadanía local. Por otro lado, el objeto planteado se convierte en una manera de enfrentar la informalidad presente, sobre todo, en las regiones más apartadas del país, y de combatir las altas tasas de desempleo que aún se constatan en las cifras que publica el Departamento Nacional de Estadísticas – DANE.

En favor de la iniciativa se puede afirmar, además, que la misma no exige una herramienta tecnológica en particular ni la creación de puestos de trabajo para personal calificado que maneje una base de datos. Por el contrario, cada departamento, distrito o municipio, independientemente a su categoría, podrá utilizar las herramientas y la mano de obra con la que cuenten para, de acuerdo a sus posibilidades, implementen un instrumento de consulta para la implementación del artículo 80 anteriormente mencionado. De esta manera, evitamos un impacto fiscal para unas entidades territoriales ya de por sí con varias necesidades presupuestales.

Cordialmente;

|  |  |
| --- | --- |
| **KARYME COTES MARTÍNEZ**Representante a la Cámara |  |
|   |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Índice Departamental de Competitividad 2023. [↑](#footnote-ref-1)